



POSCONFLICTO

La paz se construye desde el territorio

Alcaldes y gobernadores tendrán que asumir una gran responsabilidad una vez se firme la paz. Un grupo de organizaciones viene preparándolos para este reto de la mano de Colombia Líder.

MUY PRONTO COMENZARÁ para Colombia un proceso complejo que tardará muchos años: construir la paz en cada departamento, cada municipio y cada vereda del país. Como lo explica Alan Jara, ganador del Premio Colombia Líder al mejor gobernador en materia de reconciliación y nuevo director de la Unidad para las Víctimas, “en las regiones, y en especial en las más apartadas del país, se sufrieron más directamente los rigores del conflicto, y también allí tendrán que cimentarse las bases del posconflicto”.

En este escenario que se avecina, los alcaldes y gobernadores que asumieron hace algunos meses tendrán grandes responsabi-

lidades. Entre otras cosas, deberán atender y reparar a las víctimas en su territorio, reintegrar a la sociedad a antiguos combatientes de grupos armados ilegales, generar proyectos productivos y oportunidades de trabajo para unos y otros, proteger a la primera infancia e incluir sectores marginados de la población como los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Los mandatarios de los 1.101 municipios y 32 departamentos del país, cada uno con realidades distintas, tendrán que tener la creatividad, la determinación y la capacidad para gestionar recursos y generar alianzas. Solo así podrán adelantar esta tarea con más de 8 millones de víctimas registradas en el

país, más de 12.000 futuros desmovilizados, recursos escasos y una institucionalidad por consolidar. Para ello, necesitan prepararse y conocer las herramientas con las que cuentan.

Colombia Líder, con apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Éxito, ha realizado más de 54 talleres en todas las regiones del país para formar a los funcionarios locales en estos temas.

Los talleres se llevaron a cabo en tres fases. Primero, con candidatos a alcaldías y gobernaciones, antes de las elecciones del 25 de octubre del año pasado; luego, con mandatarios

▲ Colombia Líder premia cada año a los mejores alcaldes y gobernadores del país. Ahora está preparando a los nuevos mandatarios para enfrentar el posconflicto.

electos; y finalmente, con los funcionarios ya posesionados.

En ellos han participado unas 3.700 personas, incluidos 1.200 candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y juntas de acción comunal; 11 gobernadores y 440 alcaldes electos.

Los conferencistas de estos talleres son precisamente los alcaldes y gobernadores salientes que se destacaron por su labor y recibieron el premio a los mejores gobernantes que entrega Colombia Líder. Entre ellos están el propio exgobernador del Meta, Alan Jara; el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega; los exalcaldes de Cartagena del Chairá (Cauca) Luis Francisco Ruiz; de Amalfi (Antioquia), Óscar Mario García; de Tota (Boyacá), Yury Neil Díaz; de Belén (Boyacá), Wilmer Leal; de Plato (Magdalena), Jaime Alonso Peña; de San Bernardo del Viento (Córdoba), Luis Francisco López, y de Anapoima (Cundinamarca), Alexander Bermúdez.

Ellos, con su propia experiencia, muestran a sus colegas que sí es posible gobernar con éxito en lo local con la mirada puesta en el posconflicto. “Los alcaldes deben entender este momento histórico y descender a la comunidad y sus organizaciones, empoderarlas y alentar su liderazgo. Así se logra la confianza necesaria para creer y trabajar por la paz y

el posconflicto”, explica el exgobernador del Cauca Temístocles Ortega.

“Es posible gobernar cuando se tiene la autonomía y esta se logra cuando se tiene claro lo que se quiere a partir del conocimiento de la realidad del territorio y de sus habitantes. Un territorio inclusivo es aquel donde la administración pública genera procesos de inversión desde el concepto del desarrollo multidimensional e integral para niños, niñas, adolescentes, madres gestantes, mujeres, jóvenes, adultos,

priorización, genera una mejor gestión. Que no se deben crear falsas expectativas, pero tampoco destruir las esperanzas de la población. Y que tener responsables por las acciones planteadas hace que los planes funcionen.

Además, como sostiene Karem Labrador Araújo, directora ejecutiva de Colombia Líder, “el ser humano debe ser el centro de la acción. El objetivo final del trabajo de alcaldes y gobernadores será lograr unas sociedades más inclusivas, participativas e innovadoras en sus

“EL OBJETIVO FINAL SERÁ LOGRAR UNAS SOCIEDADES MÁS INCLUSIVAS, PARTICIPATIVAS E INNOVADORAS”: KAREM LABRADOR

personas mayores, personas con discapacidad, afrodescendientes e indígenas, es decir, para toda la población con un enfoque diferencial y de derechos”, afirma, por su parte, Alexander Bermúdez exalcalde de Anapoima.

Los talleres dejan lecciones fundamentales a alcaldes y gobernadores sobre los retos que enfrentan. Entre ellas, que administrar recursos escasos para atender a grandes poblaciones vulnerables no es fácil, pero es posible. Que articular a nivel nacional, departamental y municipal el trabajo frente al posconflicto, puede generar resultados significativos. Que aplicar principios gerenciales y hacer una buena

territorios; unas sociedades que vean en la paz territorial un momento de oportunidad, que debe ser aprovechada y con la cual debemos ser corresponsables”.

Estos talleres y diálogos son un espacio para que en el territorio se hable de víctimas, paz y reconciliación y que estos temas se incluyan en las agendas locales y en los nuevos planes de desarrollo.

El trabajo continúa con la asistencia técnica a alcaldes y equipos de gobierno, con herramientas para aterrizar sus planes y programas e iniciar desde ya la construcción de paz desde las regiones. ■

VÍCTIMAS

A reparar el dolor

El reto de atender y reparar a más de 8 millones de víctimas del conflicto pondrá a prueba la creatividad y la capacidad de gestión de los mandatarios locales.

AUNQUE EL CONFLICTO ARMADO ha afectado más directamente a unos municipios y departamentos que a otros, todos deben asumir a las víctimas como una de sus principales responsabilidades.

La gran mayoría ha vivido en su territorio los efectos de la confrontación (ataques terroristas, secuestros, tomas de poblaciones, minas antipersonal, etcétera); otros han llegado desplazados por la violencia en sus lugares de origen. Pero todos requieren la atención prioritaria del Estado.

Eso plantea la pregunta de cómo atender a una población que ya supera los 8 millones de colombianos sin descuidar a quienes por razones distintas al conflicto viven en condiciones de vulnerabilidad en su territorio y también requieren atención.

La gestión de Luis Francisco Ruiz, alcalde de Cartagena del Chairá hasta el pasado

31 de diciembre, ofrece un ejemplo. Ruiz mantuvo durante su mandato una administración abierta a las víctimas y se dedicó activamente a gestionar recursos que las beneficiaran. *“Gran parte de la población de Cartagena del Chairá es víctima, directa o indirectamente. Habría sido errado no incluirlas en nuestro Plan de Desarrollo. Como había pocos recursos, buscamos beneficiarlas dentro de los rubros que la ley nos permite, porque así estábamos favoreciendo a toda la población”*, dice el alcalde.

Su experiencia y la de otros mandatarios destacados en esta tarea les han servido de guía a la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), para presentar en los talleres realizados por Colombia Líder unas pautas que deben orientar a las entidades territoriales en esta labor. Recomiendan, entre otras cosas, in-

cluir a las víctimas en los programas de la administración, hacer planes de desarrollo y en general desarrollar un gobierno participativo e incluyente que reconstruya las relaciones y recupere la confianza.

Para la OIM, la falta de recursos no puede ser excusa para descuidar a las víctimas. Los mandatarios locales tienen para sacar adelante sus proyectos, entre muchas otras opciones, trabajar conjuntamente con otros municipios u otras entidades territoriales, cofinanciar proyectos con el gobierno nacional o buscar recursos de la cooperación internacional o las alianzas público-privadas.

Y todo esto no se puede llevar a cabo sin que las propias víctimas participen. *“Ellas también aportan. No con dinero, pero sí con su trabajo, su experiencia y su conocimiento. Vincularlas, además, les da un mayor sentido de pertenencia”*, agrega Ruiz. ■



▲ El Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas, que lleva a cabo la OIM con el apoyo de Usaid, busca ayudar a las autoridades colombianas para ejecutar eficazmente la Ley de Víctimas.

“DE ALCALDES Y GOBERNADORES DEPENDE QUE LA PAZ SEA UNA REALIDAD”

Peter Natiello, director en Colombia de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), habla sobre los retos que las autoridades territoriales tendrán frente al posconflicto.

SEMANA: ¿Cuál es su percepción sobre los retos que tendrán las alcaldías y gobernaciones una vez se firmen los acuerdos de paz?

PETER NATIELLO: Para que la paz sea una realidad es necesario fortalecer a las autoridades territoriales, lo cual implica, desde nuestro punto de vista, facilitar que alcaldes y gobernadores cuenten con recursos finan-

cieros necesarios para poder cumplir con su rol. Por su parte, las autoridades territoriales tienen que estar en la capacidad de rendir cuentas a sus comunidades y responder a sus necesidades. El rol de alcaldes y gobernadores en este momento histórico para Colombia es crucial, en tanto que de ellos depende, en cierta medida, que la paz sea una realidad.

SEMANA: ¿Cuáles considera elementos claves para comprender y hacer realidad la reconciliación entre los colombianos?

P.N.: Colombia lleva generaciones viviendo

en medio del conflicto y su población ha desarrollado mecanismos para adaptarse y ser resistente, lo cual en algunas regiones del país se ha traducido en la enorme capacidad de resiliencia de su gente, pero en otras, en un poco de apatía frente al conflicto y las consecuencias que este ha tenido en casi el 15 por ciento de la población del país. Ese proceso de concientización es el primer paso para poder ponerse en los zapatos del otro, y entender que construir un país en paz es una tarea conjunta.

NUTRICIÓN

Un país con niños sin hambre

Uno de cada ocho menores en Colombia sufre de desnutrición crónica. Es indispensable garantizar una alimentación adecuada durante la primera infancia como primer paso para preparar a la generación de la paz.

EN COLOMBIA SE DICE MUCHO que los niños son el futuro del país y esa idea ha inspirado varias políticas públicas destinadas a dejarles a las nuevas generaciones una mejor realidad. Pero a la hora de la verdad, su situación deja mucho que desear.

Sin ir muy lejos, la muerte de 19 niños en La Guajira en los primeros tres meses de 2016 horrorizó al país y le recordó que falta mucho para que todos los infantes colombianos reciban lo más básico: una alimentación adecuada. Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia realizada en 2010, el 13,2 por ciento de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica, es decir, su talla es mucho menor de lo que debería ser para su edad. Esa cifra es preocupante: uno de cada ocho niños está desnutrido y lo más grave es que otro 30 por ciento está en riesgo de estarlo.

Lo cierto es que durante los primeros 1.000 días de vida, que incluyen los nueve meses de gestación y los primeros dos años, se desarrolla el 70 por ciento de las conexiones neuronales en el ser humano. Por eso, garantizar una buena nutrición durante la primera infancia disminuye la prevalencia de enfermedades durante la niñez, baja los costos de atención en salud, reduce la mortalidad temprana, aumenta la competitividad y mejora los ingresos de esos niños durante su vida adulta.

“Invertir en la nutrición de la primera infancia es lo más rentable. Las generaciones que estamos alimentando hoy van a construir un país en paz”, dice Germán Jaramillo Villegas, director ejecutivo de la Fundación

Éxito, entidad que con el programa Gen Cero busca que en 2030 Colombia tenga la primera generación de niños menores de 5 años sin desnutrición crónica.

Esa entidad y Colombia Líder pusieron el tema sobre la mesa en los talleres que realizaron con los actuales alcaldes y gobernadores. La idea es que ellos, que tienen en sus manos la construcción de un país en paz, asuman como prioridad en su agenda la nutrición de la primera infancia.

El primer paso es trabajar con las madres

Algunos de los alcaldes que terminaron su periodo en 2015 trataron este tema con resultados prometedores. Carlos Daza exalcalde de Fusagasugá cuenta que en esa ciudad construyeron un centro para las mujeres embarazadas en el cual les garantizaban alimentación, transporte y beneficios para que no renunciaran al trabajo.

El otro paso es tener en cuenta a los niños recién nacidos y, con prioridad, hasta los dos años. Los gobernantes pueden impulsar

políticas como ampliar la cobertura en controles prenatales, promover la lactancia materna, trabajar por la seguridad alimentaria, abastecer de agua potable y alcantarillado a las zonas más vulnerables, brindar educación nutricional y facilitar el acceso al sistema educativo, principalmente de mujeres.

Hay experiencias por replicar. Fernando Flórez exalcalde de Tunja cuenta que allí pusieron en marcha un programa para 4.500 familias con niños de las zonas vulnerables, a quienes ni el ICBF ni el municipio capacitaban en el cuidado nutricional de los menores y en convivencia familiar. Así lograron disminuir los índices de desnutrición crónica.

La idea es que esa nueva generación de niños bien alimentados tenga las herramientas para construir el país del posconflicto. Al final, el asunto también es de pura matemática. Pues como dice Flórez, *“es más costoso recuperar un niño mal alimentado que garantizarle una buena alimentación incluso desde antes de que nazca”*. ■



▲ Según cifras del Banco Mundial, disminuir en 1 por ciento las tasas de desnutrición, baja 4 por ciento los índices de pobreza.

Actualmente un 35 por ciento de niños colombianos nace con un peso inadecuado (inferior a 3.000 gramos), y un 9 por ciento con bajo peso (inferior a 2.500 gramos). Además, el 59 por ciento de los niños entre los 6 y los 12 meses tiene anemia, lo que deteriora la maduración del cerebro, afecta su concentración y la capacidad de aprendizaje.

UN PAÍS QUE ENVEJECE

EL PROMEDIO DE EDAD DE LA POBLACIÓN colombiana aumenta aceleradamente. Según Misión Colombia Envejece, una investigación conjunta entre Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha realizada en 2015, los mayores de 60 años, que hoy son el 10 por ciento, alcanzarán el 24 por ciento en 2050.

Las zonas urbanas experimentarán con más fuerza este cambio, que será clave para la economía, la sociedad, la cultura y la construcción de paz. “En Colombia todos nos estamos haciendo viejos en el marco de la guerra, y eso va a tener un impacto luego de que se firme un acuerdo, porque todos vamos a tener un rol al construir la paz”, dice Lucas Correa, líder de Incidencia de la Fundación Saldarriaga Concha.

Esta entidad participó en los talleres que Colombia Líder organizó con los candidatos a cargos de elección popular y posteriormente con los mandatarios electos. Allí presentaron una serie de recomendaciones para que los gobernantes trabajen por la vejez. Estas son las más importantes:



▲ Actualmente el 11 por ciento de las víctimas en Colombia son mayores de 60 años. En 20 años, otro 30 por ciento alcanzará esa edad.

- **Fortalecer** la atención de las víctimas del conflicto mayores de 60 años.
- **Crear o ampliar** la cobertura y los montos de subsidios económicos para mayores de 60 años, especialmente mujeres y habitantes de áreas rurales.
- **Impulsar** el ahorro, la preparación económica para la vejez, la vida saludable y los programas que fomenten la cotización universal al sistema de pensiones.

- **Desarrollar** programas de adquisición y mejoramiento de vivienda para personas mayores.
- **Preparar** a las personas para la vejez, formar a cuidadores de personas mayores y crear centros para la atención integral de esta población.
- **Adelantar** iniciativas que propicien la productividad y el emprendimiento de los mayores y que potencialicen sus conocimientos. ■

EL RETO DE LA INCLUSIÓN

MÁS DE 50 AÑOS DE CONFLICTO han afectado a millones de colombianos, pero especialmente a quienes adquirieron una discapacidad por culpa de la guerra y a quienes esa misma guerra les creó barreras que dificultaron sus condiciones de vida.

En Colombia hay cerca de 15.000 víctimas registradas de minas antipersonal desde 1985. De hecho, el país ocupa en el mundo el segundo lugar después de Afganistán. Se espera que el número siga creciendo, incluso luego de firmar un acuerdo de paz, ya que las minas permanecerán en el territorio mientras no se complete el proceso de desminado.

► Uno de los retos es fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad y fomentar en ellos la educación financiera.

Para la Fundación Saldarriaga Concha los gobernantes locales deberán tener en cuenta esta situación para trabajar por incluir a las personas con discapacidad y especialmente a quienes han sido víctimas del conflicto. Estas son algunas de las recomendaciones para los gobernantes:

- **Caracterizar e identificar** a quienes tienen discapacidad por medio de la estrategia de registro que lleva el Ministerio de Salud.

- **Desarrollar** programas de detección y atención temprana de la discapacidad y de rehabilitación integral que incluyan salud, servicios institucionales y comunitarios.
- **Promover** la inclusión social en los ámbitos cotidianos, desde un enfoque de independencia y autonomía para las personas con discapacidad.
- **Aumentar** la oferta de educación inclusiva, preparar a los maestros e instituciones, crear

ayudas didácticas y apoyar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con discapacidad en las aulas.

● **Diseñar** programas dirigidos a los cuidadores y las familias de personas con discapacidad.

● **Garantizar** espacios de participación para las personas con discapacidad en los comités de discapacidad, de justicia transicional, política social, entre otros. ■

